



**PLATAFORMA
POLÍTICA**

ADOPTADA EN LA X ASAMBLEA GENERAL

¿Cómo empeñamos en un trabajo ingrato cuyos frutos no hemos de ver maduros si no supiéramos que una descendencia espiritual sabrá cogerlos y gozarlos y bendecir a los sembradores?

Manuel Azaña

Si no garantizamos desde las instituciones públicas que las personas, que nuestros vecinos y vecinas, puedan desarrollar un proyecto de vida con dignidad, no sé qué estamos haciendo en política.

María Pastor

Tabla de contenidos

Introducción	3
Modelo de país	5
La República como fuente de libertad y felicidad	5
Separación de poderes y modelo autonómico	6
Reforzar la democracia	7
El gobierno del pueblo está bajo amenaza	7
Democratizar la vida y las instituciones	9
España en el Mundo	13
Derechos humanos	13
Paz	14
Contra la globalización neoliberal	15
Naciones Unidas	17
Hacia una Europa federal	18
Descolonizaciones fallidas	19
Ningún ser humano es ilegal	20
Economía verde	21
Modelos alternativos al crecimiento ilimitado	22
Estructuras económicas	23
Una economía sostenible	25
Una política fiscal justa	27
Mercados financieros	28
Economía digital	29
Diversidad	31
Interseccionalidad	32
Antirracismo	33
Derechos de las personas con discapacidad	35
Género	36
Salud, derechos sexuales y reproductivos y lucha contra la discriminación y la violencia de género	37
Derechos LGTBIQ+	39
Libertad religiosa	40
Derechos culturales y étnicos en el estado	41
Antiespecismo	42
Ecología	43
Valor de la Naturaleza	43
Cambio climático	44
Biodiversidad	45
Agricultura, alimentación y vida rural	46

Bioética y espectáculos con animales	48
La ecología como fundamento de nuestra sociedad	49
Educación	50
Derecho fundamental y pilar del modelo de país	50
Políticas públicas para fortalecer la educación	50
Gratuidad del sistema educativo, becas y ayudas al estudio	52
Igualdad e inclusión educativa	53
Calidad e innovación docente	55
Democratización del sistema educativo	57

Introducción

Juventud Verde, agrupación de juventudes del partido político Verdes Equo, es la voz de los y las jóvenes verdes en las instituciones del Estado Español. Como parte de un movimiento más amplio, que une sus voces y aspiraciones de manera colectiva, a nivel europeo en la Federación de Jóvenes Verdes Europeos (Federation of Young European Greens) y globalmente a través de Jóvenes Verdes Globales (Global Young Greens), estando Juventud Verde plenamente integrada en ambas organizaciones.

Nos encontramos reunidas en torno a la idea fundamental de que nuestra forma de vivir y producir es insostenible y tiene que cambiar. A través de nuestras luchas y aspiraciones personales llegamos a comprender que ninguna lucha o reivindicación es viable si no garantizamos las condiciones materiales que sostienen la vida en nuestro planeta.

Nos negamos a elegir entre la supervivencia y el bienestar de nuestro planeta compartido, nuestras libertades personales y el bienestar social. Para nosotros, una perspectiva verde engloba todas estas demandas, tal y como se describe a lo largo de este documento.

No hay futuro para la juventud si las aspiraciones ambientalistas y la lucha por la justicia social no caminan de la mano. Esto es que no hay futuro para la juventud si nuestras sociedades no se congregan en torno a la Ecología Política y el ecosocialismo.

Para lograr la supervivencia del planeta, la mejora de las libertades personales y un desarrollo sostenible, así como la justicia social global, debemos encontrar los canales, los escenarios políticos y herramientas para lograrlo. La elaboración de políticas públicas fundamentadas en la evidencia científica y las pruebas aportadas por expertos, son la herramienta más eficaz para lograr nuestros objetivos. Las instituciones y administraciones del estado son los espacios donde se toman las decisiones que más trascendentalmente pueden afectar a nuestras vidas. Es por ello que trabajamos para estar presentes y ser escuchados y escuchadas en todas las etapas del proceso de deliberación y decisión, para poder dejar clara la extremada urgencia de políticas con perspectiva verde.

Pero sabemos que la política no empieza ni termina en las puertas de estas instituciones. Hemos aprendido de nuestra historia la brutalidad y la dureza con las que fueron enfrentadas las luchas por los derechos que hoy disfrutamos.

Los retos no sólo residen en las victorias dentro de la política institucional, sino también en el cambio de nuestra forma de hacer política. Hemos visto cómo el medio ambiente, los derechos de los animales, los derechos de las minorías y otras causas olvidadas han pasado al centro de las instituciones a través de los sueños y acciones de, a veces, un pequeño número de personas y movimientos profundamente comprometidos con los mismos. Es por ello por lo que trabajamos para mantener un pie en las instituciones y otro en la calle.

El nuestro es un proyecto político de futuro, fundamentado en la experiencia de la realidad social del país, de las necesidades de la ciudadanía y las limitaciones del planeta, en las siguientes páginas desgranamos con detenimiento ese proyecto.

Modelo de país

La República como fuente de libertad y felicidad

Juventud Verde es una organización neta y profundamente republicana. Consideramos que únicamente un sistema republicano con una jefatura de estado elegida democráticamente garantiza la transparencia de la institución. La permanencia de una única familia en el ejercicio de un cargo público sea este cual sea, es incompatible con el principio democrático de igualdad de acceso de toda la ciudadanía a los puestos de la administración.

En Juventud Verde consideramos que sólo a través de la República es posible la consecución del buen gobierno. Este buen gobierno no es otra cosa que la persecución del bien común por encima de las aspiraciones y deseos personales. El nuestro es un proyecto apartado de egoísmos y personalismos, un proyecto que por encima de todo busca acabar con el sufrimiento en nuestras sociedades, humano y no-humano.

El fin del sufrimiento, la felicidad de todas y cada una de las personas que componen la ciudadanía, el auténtico bien común, solo se puede alcanzar poniendo en el centro de la vida los cuidados. Cuidados entre personas y para con el planeta.

La República habrá de promover la libertad de la ciudadanía en un sentido amplio. Entendemos que nadie es libre cuando tiene miedo a ser abiertamente quién es o si pasa por una situación de necesidad o precariedad, nadie es, pues, libre cuando sufre. La República habrá de asegurar la suficiencia material de la ciudadanía a través de la puesta en marcha de un modelo de renta básica universal, y paralelamente proveerse de un marco jurídico y administrativo que blinde el respeto a la diversidad como base de la convivencia. Solo entonces podremos hablar de libertad.

Únicamente desde este modelo republicano que garantiza la libertad e igualdad de la ciudadanía, el respeto y promoción de los Derechos Humanos, la separación de poderes, la veneración por la transparencia y los procesos democráticos y que entienda que la naturaleza tiene unos límites concretos que deben ser respetados, podrá ser alcanzada la felicidad colectiva.

Separación de poderes y modelo autonómico

El principal problema al que se enfrenta todo sistema político es el peligro de que una persona o grupo de personas confunda por voluntad general el interés personal. Para garantizar que esa persona o grupo de personas no pone las instituciones y el poder público a su servicio, la República ha de ahondar en la separación de poderes. En caso contrario, la reunión de una diversidad de competencias en una única persona o grupo de personas permitiría el ejercicio arbitrario del poder público. Se podría disponer de la ley sin restricciones.

La República debe profundizar la separación clásica de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Poniendo fin al actual control que las mayorías parlamentarias ejercen sobre la judicatura. Paralelamente la República habrá de insistir en la distribución de las competencias horizontalmente, entregando a los territorios las competencias que se entiende no necesitan ser uniformemente ejercidas por el ejecutivo estatal. Es por esto por lo que nuestro modelo de república es un modelo que pretende reforzar el actual modelo autonómico, armonizando las competencias para transitar hacia un modelo federal en el que todos los territorios se encuentren en pie de igualdad.

Si el poder público es compartido entre el ejecutivo estatal y todas las autonomías, unas administraciones podrán controlar a las otras y poner freno a los posibles abusos de las demás. Garantizando además el respeto a las particularidades históricas de los pueblos y territorios que componen el estado.

Aunque se toma como punto de partida el actual modelo autonómico no se concibe en absoluto este como un modelo perfecto e intocable que no deba estar sujeto a cambio, habrá de ser la ciudadanía, de cada territorio o región histórica, quien decida si mantener o cambiar las fronteras de las actuales autonomías.

En este sentido, y por el conjunto de argumentos presentados en esta sección, la redacción de una nueva Constitución Republicana o reforma sustancial de la Constitución de 1978 en una línea republicana y federal debe ser una visión para la próxima década.

Reforzar la democracia

El gobierno del pueblo está bajo amenaza

La democracia, como ha sido entendida en Europa y el resto del mundo occidental, está en retroceso o, al menos, bajo amenaza. El surgimiento de organizaciones, partidos y gobiernos autoritarios se ha convertido en la norma en los países de nuestro entorno y el nuestro propio, habiendo alcanzado el poder en países de distintos contextos y localización, desde Polonia hasta los Estados Unidos, pasando por El Salvador o Filipinas. Este autoritarismo de tintes xenófobos, machista, LGTBIfóbico y protector de los poderosos, explota la incertidumbre y miedo de millones de personas, que viven en sus carnes las peores consecuencias de la desigualdad y ven cada vez menor esperanza para la juventud y las clases populares.

El auge de la extrema derecha no es la única amenaza a la democracia. Cabría preguntarse si antes de la última década en la que ha ido fraguando el crecimiento de este movimiento, la democracia en occidente y en España en particular estaba sana. Y es que precisamente en España hace ahora diez años, se llenaron las plazas de todo el país para reclamar, entre otras cosas, una democracia real. La democracia ha de ser mucho más que la entrega del poder popular cada cuatro años.

No cabe democracia, ni en su mínima expresión, allá dónde la desigualdad desequilibra la balanza a favor de unos pocos que cuentan con muchos más recursos. En definitiva, la democracia es la gestión colectiva de lo común, lo cual tiene enorme relevancia desde la perspectiva de la ecología social, pues quién más tiene, además, es quién más contribuye al colapso de los ecosistemas. Por tanto, la desigualdad y la crisis climática son dos elementos que se interponen en el desarrollo de nuestro sistema democrático y que encuentran en su debilidad el contexto para que unos pocos sigan escindiéndose de la sociedad.

Nuestra democracia se ve limitada principal y prioritariamente por una esfera sobredimensionada que a su vez es el mayor obstáculo a la transición socioeconómica que se requiere para afrontar la crisis ecológica: el mercado. Éste, como elemento central de nuestra sociedad global, justifica todo tipo de intervenciones más o menos evidentes contra la voluntad popular. Ya sea desde represiones brutales contra el pueblo ejerciendo su libertad de expresión, como en Chile, Ecuador o Colombia más

recientemente, como las (no tan) sutiles referencias en prensa a las tendencias de los mercados ante la posibilidad de que uno u otro gobierno pueda ser elegido, como si acaso ese ente cuasi divino tuviese más que decir sobre el futuro de un país que sus propios ciudadanos.

Pero no debemos concebir el mercado como un ente abstracto, sino como lo que es la representación de intereses empresariales y personales, que se sirven de su poder para influir y torcer la democracia en su favor. Sumidos en su lógica hemos pasado de ser concebidos como ciudadanos que disfrutaban de los servicios públicos a potenciales clientes dispuestos a consumirlos. Hundidos en sus criterios de eficiencia y recorte del gasto hemos presenciado el progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar y la pérdida de calidad de los servicios públicos en beneficio de la privatización. Y esto, nuevamente, es causa y consecuencia de desigualdad.

Considerar la democracia simplemente como el derecho de cada persona a ejercer el voto es, cuanto menos, simplista e ingenuo. Pues la capacidad de intervenir en el debate público, en la expresión de opiniones, necesidades y deseos sobre el futuro de nuestra sociedad está ligada directamente a la suficiencia material en nuestras vidas, solo quien no tiene que preocuparse por lo que comerá ese día podrá preocuparse por los problemas del común y por tanto participar del debate. De nada vale que cada persona pueda votar sobre un asunto si no ha tenido en ningún momento capacidad de dar a conocer su visión sobre el mismo.

¿Fomenta acaso la democracia el control privado de los medios de comunicación? Sería del todo ingenuo pensar que las grandes empresas y bancos con accionariado en grandes medios de comunicación y en productores de combustibles fósiles van a permitir que sus medios informen sobre la relación de aquellos con la crisis ecológica. De manera similar, es de sobra conocida la utilización de las redes sociales para influir en la opinión pública y manipular los procesos democráticos. Como decimos, estas y otras cuestiones nacen de la desigualdad y amenazan cualquier aspiración realmente democrática.

Finalmente, y es de especial interés para la juventud ecologista de España, la amenaza frontal que la crisis climática supone para la democracia. No sólo por algunas de las cuestiones que se han mencionado más arriba, sino por el riesgo no desdeñable del surgimiento de lo que se viene llamando eco-fascismo. Así pues, en un contexto de inestabilidad climática y, por ende, de reducción del acceso a recursos naturales que hoy damos por supuestos, estos regímenes autoritarios, por medio de la violencia,

aseguraron los privilegios de unas élites, que no serán muy distintas de las actuales. Ya hay movimientos de corte ultraderechista que utilizan la crisis climática para justificar sus políticas de exclusión, como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Nuestra convicción es que no habrá transición ecológica si no es justa y no puede ser justa si no es democrática.

Democratizar la vida y las instituciones

En este contexto nos organizamos con esperanza y convencimiento de que se pueden alcanzar sociedades más justas y con mayor respeto hacia el medio. Pues si cuidamos la naturaleza, también ella nos cuidará.

Creemos firmemente que esto pasa por extender la democracia y, por tanto, por aumentar la igualdad y la participación. De la misma forma que la política impregna todas las facetas de la vida, se quiera o no, la democracia debería alcanzar también cada rincón de nuestra vida común. Esto necesariamente impone tanto derechos como obligaciones para los ciudadanos, que como tales deben no sólo participar del ciclo electoral periódico, sino activamente en la gestión de lo colectivo.

Evidentemente, ese horizonte democrático requiere de otro modo de vida, de otra velocidad. Es imposible exigir a nadie que además de lo que se absorbe de cada una en la participación laboral y del modelo de ocio hiperconsumista, la gente tenga tiempo de participar e involucrarse en lo público. Evidentemente esta realidad responde a unos intereses concretos y como organización transformadora es nuestro deber denunciarlo y combatirlo, pues aliviar esa presión en la vida de la gente repercutirá positivamente en nuestra lucha por la igualdad.

Por ello, como Juventud Verde nuestra tarea y objetivo no es solo luchar en las instituciones por ganar espacio electoral. Sino atraer a esa mayoría social concienciada con la realidad del medio ambiente y que aspira a un futuro que no sólo es mejor, sino que es necesario. La apatía y la falta de expectativas ante la ausencia de nuevos horizontes son palpables en nuestras sociedades: «nada va a cambiar». Es difícilmente criticable si ni siquiera en el contexto de una pandemia mundial se perciben cambios en el modelo de sociedad, no al menos en sentido más colectivo. Se cree más en el mito de la realización individual y de la aspiración Amancio Orteguista que en la mejora colectiva. Por tanto, no hay nada más favorable a la democracia que cambiar las tornas y crear aspiraciones comunes.

La radicalidad democrática no solo es un fin en sí misma, sino que también constituye

un medio fundamental para la consecución de una transición ecológica socialmente justa. Es por tanto necesario para Juventud Verde, y cualquier fuerza y movimiento que comparta nuestras aspiraciones, vincular y politizar a la juventud y a la sociedad en general en este proceso. Las transformaciones necesarias son de tal calado que no pueden llevarse a cabo sin el apoyo consciente de la sociedad y esa es la mayor de nuestras tareas.

Mayor democracia es mayor libertad. Una más compleja y real que la de mirada individualista tan en boga recientemente. Una libertad que llega a más espectros de la vida y no se queda solo en las pocas horas de ocio que nos quedan como migajas tras largas jornadas de trabajo que imposibilitan la conciliación. Como si en realidad fuésemos siquiera libres de elegir el tipo de ocio que queremos disfrutar. Democratizar más espacios de la vida cotidiana, para ser más libres, esa sí es una aspiración ilusionante y digna de campaña.

En esta dirección, los comunes urbanos, rurales y digitales representan una innovación social a explorar dada la capacidad que tienen de asentar lazos de cooperación en comunidades diversas y generar relaciones productivas y de consumo sostenibles al realizar un uso compartido y eficiente de los recursos naturales y humanos. La creatividad y deliberación ciudadana deben ser parte esencial del motor de estos comunes, dando valor a la cultura cooperativa y al conocimiento común que emerge de estas sinergias

En definitiva, debemos llevar la máxima «pensar global actuar local» a la democracia, pues la democracia se construye desde la base. La sumisión de los aspectos cotidianos de vida a la voluntad general como la economía, el uso de los recursos naturales, la educación, el trabajo, el ordenamiento urbano y rural, etc. potenciará la capacidad transformadora general de nuestro movimiento.

Apostamos por una democracia participativa y descentralizada. Acercar la toma de decisiones a los ciudadanos incidirá en esa mayor participación, pero nunca esta será una realidad si no se transforma el modo de vida y la forma de socialización. Y, sobre todo, esa descentralización no puede suponer la creación de guerras de rapiña entre territorios o conflictos de intereses, pues la solidaridad debe ser el principio guía de cualquier comunidad política y humana. Mientras alcanzamos este objetivo, desde las instituciones que tenemos disponibles se debe cumplir los mínimos democráticos que nos permiten el marco actual.

Los partidos políticos son los depositarios de la voluntad popular y tienen, además

de una tarea de representación, una responsabilidad para con la democracia en sí misma. Cada vez más vemos el uso de información parcial, bandazos de opinión y práctica sólo para atacar el rival, aplicando el principio de todo vale para llegar al poder, que luego ya lo arreglamos. Hay que limitar más el poder de los partidos, empezando por exigir el cumplimiento de los Programas Políticos (incluso cuando no son de nuestro agrado), pues ese ha de ser la declaración de intenciones y contrato para con la ciudadanía.

Como demócratas debemos rechazar cualquier expresión de odio contra el diferente. Debe respetarse la libertad de pensamiento, expresión y palabra. Sin embargo, la retórica que llama a la violencia y la discriminación en el discurso público, la propaganda o la información debe ser reconocido y señalada como discurso de odio y prohibido.

Finalmente, se debe garantizar la independencia de los poderes del Estado. Pero también deben éstos representar a la sociedad de manera real, democratizando el acceso a la judicatura, de tal forma que el modelo no facilite principalmente el acceso a personas de clase alta. Paralelamente se habrá de acometer una reforma de las instituciones que garantice que quienes participan de las mismas lo hagan por vocación y en pro del buen gobierno y no para enriquecerse. Los distintos parlamentos, instituciones y asambleas que vertebran nuestro sistema democrático se han convertido en un «todo incluido» por ello reclamamos el fin de los aforamientos y la limitación de mandatos y salarios, tomando como referencia para el establecimiento de estos últimos el sueldo medio del estado.

España en el Mundo

Derechos humanos

Juventud Verde trabaja por el reconocimiento y respeto universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para lograr este objetivo necesitamos de la sociedad civil, española y mundial, apoyada por instrumentos de educación y formación. La defensa de los derechos humanos necesita de una perspectiva transversal, aplicada a todos los niveles institucionales, y del desarrollo de los mecanismos de control correspondientes. Condenamos vivamente la utilización de los derechos humanos en la política internacional como un instrumento para perseguir intereses nacionales espurios.

Reconocemos que los derechos básicos, relativos a las libertades civiles y a la participación en la vida política en la vida política, siguen siendo justa causa por cuya defensa luchar en España y en Europa como en el resto del mundo.

Estamos a favor de un régimen internacional de derechos humanos más fuerte que trabaje en estrecha colaboración con los tribunales regionales de derechos humanos. Apoyamos el establecimiento de medidas efectivas que posibiliten perseguir judicialmente las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial, ya que actualmente existe un gran vacío en el ámbito internacional en lo que respecta a la aplicación real de La Declaración Universal de Derechos Humanos. España ha de abogar en los círculos internacionales por la instauración de una institución imparcial que lleve a los autores de delitos tanto en el Norte como en el Sur Globales ante la justicia, si ésta no puede aplicarse regionalmente.

Reconocer la vigencia de la Carta Internacional de Derechos Humanos y trabajar por su aplicación no supone obviar la realidad cambiante de los derechos humanos. Los derechos humanos son un sujeto en constante evolución que nace de las necesidades de cada persona, dentro de cada sociedad. Por ello defendemos el debate abierto, democrático y sosegado sobre los derechos humanos, encaminado a continuar actualizando y ampliándola Carta Internacional de Derechos Humanos, buscando la promoción e incorporación de los denominados derechos de tercera generación o colectivos y los de cuarta generación o digitales, así como cualquier desarrollo posterior dirigido a incrementar la protección y las capacidades emancipatorias de un colectivo o colectivos sin perjuicio asimétricos o desproporcionadas sobre el resto de seres sintientes y sus generaciones futuras.

Paz

Juventud Verde defiende un mundo sin armas y sin guerras. Entendemos la paz como algo más que la ausencia de guerra y el pacifismo como un concepto necesariamente transversal, que afecta a diferentes ámbitos de la política. La paz se construye día a día reduciendo las fuentes de conflicto como la pobreza, la injusticia, la discriminación o la explotación y el expolio de recursos. En este sentido, desde Juventud Verde defendemos una política activa por la paz en un sentido amplio, capaz de prevenir los dañinos efectos de métodos de producción agresivos con el medioambiental, responsables de devastación, desigualdades y migraciones climáticas. No es posible obtener la paz sin una perspectiva de justicia global y la promoción de un planteamiento estratégico para dirigirnos a ella. En este sentido defendemos que:

España debe renunciar a la guerra como herramienta de política exterior y contribuir a la erradicación de la violencia utilizando todos los medios de que dispone en los foros internacionales. El Estado Español debe velar por el compromiso y la confianza multilateral como pilares de una paz duradera y consolidada.

Como ya hemos dicho, la protección de los derechos humanos se ha utilizado con demasiada frecuencia para legitimar acciones más allá de la protección de la población civil. Es por ello que toda intervención en la que participen las Fuerzas Armadas o que cuente con el apoyo internacional de España debe contar con un mandato de la ONU. Dicha intervención sólo habrá de tener lugar para detener los crímenes atroces en masa y debe estar estrictamente limitada en su mandato y acción, además de incorporar siempre una visión de reconstrucción sostenida del territorio a largo plazo mantenida por el empoderamiento y la involucración de la población local.

Nos oponemos al mantenimiento de grandes fuerzas militares que consideramos un despilfarro de recursos que deberían destinarse a otras prioridades y que son agresivamente provocativas hacia otros grupos y naciones. Por lo tanto, apoyamos la reducción continua de los arsenales y exigimos el fin de toda producción de armas dentro de las fronteras del Estado Español. España debe poner fin a todas las subvenciones a la industria del armamento en el ámbito nacional y comunitario y detener los envíos a aquellos regímenes que no realicen ningún esfuerzo para el cumplimiento de los Derechos Humanos o los vulneren activamente, dentro o fuera de sus fronteras.

Hay que destacar en este apartado la capacidad destructiva de las armas nucleares. España debe ratificar a la mayor prontitud el Tratado Internacional sobre la Prohibición

de las Armas Nucleares y todo armamento de potencias extranjeras con potencial nuclear debe ser expulsado del territorio nacional.

En esta línea, estructuras como la OTAN amenazan el proceso de construcción europea, y su compromiso con difundir la paz. Por su propósito histórico, su estrecha perspectiva y sus estructuras fundamentalmente antidemocráticas, constituye una institución caduca que no responde a los intereses de la población española. Por ello, pensamos que la OTAN debe ser desmantelada y proponemos, en su lugar, la creación de un Cuerpo Civil Europeo de Paz, como estructura no militar, encargado de preservar la paz. Los miembros de este Cuerpo deben ser formados en las habilidades de resolución no violenta de conflictos, y deben ser empleados como medida preventiva y curativa.

Juventud Verde se opone frontalmente a la participación forzosa en el entrenamiento y las actividades militares. Queremos reconocer la impagable deuda de la juventud española con el movimiento de insumisos y su lucha por la abolición del servicio militar.

Contra la globalización neoliberal

Juventud Verde defiende la justicia global y la igualdad entre países. Nos oponemos a la actual globalización neoliberal promovida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo modelo sigue enriqueciendo a las grandes empresas multinacionales y a las instituciones financieras a costa del Sur Global, de ciertas clases sociales y del medio ambiente.

El neoliberalismo apoya la privatización de las industrias nacionales, la desregulación y la potenciación del papel del sector privado, restringiendo o eliminando el papel del Estado. Socava la toma de decisiones local y explota a las poblaciones locales en los países no occidentales. El neoliberalismo mundial promueve la eliminación de las restricciones a las empresas y al capital, ahondando en la brecha que separa a las distintas regiones del mundo y sin garantizar la misma libertad de movimientos para las personas ni las patentes. Estas tesis conducen a altos niveles de exclusión social, reforzando la división Norte-Sur y salvaguardando el neocolonialismo.

Esto deriva de una larga historia de explotación por parte de las potencias europeas, entre las que se sitúa España. La industrialización del Estado Español se consiguió en parte gracias a los beneficios que reportaba la trata de esclavos en el Caribe y en la enajenación de materias primas del resto del globo. Aún hoy la mayoría de las materias primas necesarias para el crecimiento material actual de nuestras economías sigue

procediendo del Sur Global.

Por ello abogamos por una forma alternativa de globalización basada en la justicia global, la cooperación, el impulso de la democracia y el refuerzo de los derechos humanos y la libre circulación de información y personas. En solidaridad con la mayoría global marginada y excluida de la toma de decisiones presionamos por unas estructuras e instituciones globales más justas, que deben reflejarse en el sistema económico. Es así que recalcamos la necesidad de incorporar a la globalización mayores mecanismos de cohesión que permitan eliminar los impactos asimétricos producidos por la desviación de comercio y el extractivismo. Por ello, abogamos por la reintroducción del valor real de las personas, medio ambiente, bienes, servicios y trabajo en el cómputo del precio para evitar la injusta externalización de costes y por la difusión, el mantenimiento y la cooperación de instituciones inclusivas según los principios de buena gobernanza y justicia global, siguiendo los intereses de las poblaciones locales que sea posible.

Para ello urge garantizar la propiedad y control democrático de los recursos naturales por parte de la población mundial. Apoyamos a las organizaciones de base, los movimientos de los pueblos indígenas y líderes democráticos en sus esfuerzos por impulsar la justicia global. Así, apoyamos a instituciones como el Foro Social Mundial (FSM) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UNESCO).

Naciones Unidas

Las Naciones Unidas nacieron de las terribles experiencias de las guerras mundiales. Sin embargo, las naciones del Norte Mundial que gobiernan la ONU no consiguieron crear un mundo justo y en paz.

Con sus organizaciones y las distintas Convenciones de Derechos Humanos la ONU pretende garantizar la libertad y el bienestar de todos. El objetivo de desarrollo de la ONU no debe reducirse a los objetivos abstractos del milenio, pues una política de justicia global sólo puede lograrse con una distribución justa de la riqueza y el poder producida dentro de los límites planetarios. Es por ello que celebramos la introducción de objetivos cuantificables en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero lamentamos que se mantenga una irresponsable fijación por el crecimiento económico incapaz de cuestionar los límites del modelo productivo. En este sentido, denunciamos la falta de ambición de unos ODS todavía ligados a un modelo capitalista ambiental y socialmente irresponsable.

Para fortalecerse, la ONU debe democratizarse. Exigimos la disolución del Consejo de Seguridad de la ONU por su marcado carácter antidemocrático. Pedimos una Asamblea Parlamentaria de la ONU elegida democráticamente que elija un comité ejecutivo que dé una representación justa a las diferentes regiones del mundo y legitimidad a los órganos de decisión de la ONU.

La Asamblea General de la ONU debe aplicar políticas económicas y sociales para lograr la justicia global, oponiéndose a las políticas hegemónicas de la OMC, el BM y el FMI siempre que éstas contravengan los intereses de la humanidad y nuestro planeta.

Hacia una Europa federal

Pese a que la actual Unión Europea es un subproducto del neoliberalismo al que la ciudadanía europea ha conseguido arrancar un limitado nivel de participación. Juventud Verde es una organización comprometida con el proyecto europeo, el diálogo entre las naciones del continente ha garantizado la paz de tres generaciones, hecho sin precedentes en nuestra historia.

Juventud Verde apuesta por profundizar la Unión a la vez que se incrementan los procesos de participación ciudadana, frente a los estados, el pueblo. Urge recuperar la soberanía popular en las instituciones europeas donde debe primar la voz del Parlamento Europeo, como expresión legítima de las demandas de la ciudadanía europea. El tiempo de la Unión de las empresas y las grandes fortunas ha terminado, es hora de una Unión Europea de los pueblos, una Unión Federal que elimine las fronteras y cree realmente un espíritu de ciudadanía europea, fundamentado en el imperio del estado de derecho, la participación democrática y el respeto a los derechos humanos.

Una España comprometida con los Derechos Humanos habrá de apostar por el proyecto de integración europea como faro de la democracia y las libertades. Las instituciones europeas deben romper toda relación con estados de corte totalitario o que violan sistemáticamente los derechos humanos si quieren ser coherentes con los principios rectores de La Unión.

Entendemos que las caducas formas del Estado-nación ya no son suficientes para representar la complejidad de nuestras sociedades modernas, por ello desde Juventud Verde apostamos por delegar poder hacia las organizaciones subnacionales, fortaleciendo el Comité Europeo de las Regiones encargado de dar voz directa a provincias, municipios y ciudades que componen la Unión Europea para acercar así a la ciudadanía a las instituciones

Descolonizaciones fallidas

Durante el pasado siglo, buscando reeditar un pretérito imperial perdido, las altas esferas del estado participaron de la colonización del continente africano. Hasta la segunda mitad del siglo XX El Sahara Occidental y la actual Guinea Ecuatorial permanecieron bajo dominio español.

La República de Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia en octubre de 1968 y desde entonces se han sucedido dos gobiernos dictatoriales culpables de sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esta situación política ha sido prácticamente auspiciada por España, incluso una vez instaurada la actual democracia, pues sirve a los intereses económicos y estratégicos del Estado Español en la zona.

El caso del conocido como Sahara Español es aún más sangrante pues la dictadura permitió la invasión del territorio por parte de Marruecos, provocando una crisis de refugiados que aún continúa más de cuatro décadas después y sin que ningún gobierno constitucional haya hecho nada por revertir la anexión ilegal.

En ambos casos la situación de inestabilidad en la zona y la constante negación de los derechos fundamentales a las poblaciones locales es aprovechada por empresas españolas para implantar políticas de un salvaje carácter extractivista que facilitan que unos pocos se enriquezcan a costa de la vida de muchos y del sufrimiento de naciones enteras. El estado español no puede continuar mirando hacia otro lado ni seguir enriqueciéndose directa o indirectamente de la injusticia y debe reconocer su deuda pendiente con los pueblos de ambos territorios.

España debe hacerse cargo de su posición como potencia administradora en el Sahara Occidental y como uno de los principales socios económicos de la dictadura ecuatoguineana y hacer todo lo posible por revertir la situación. Se debe transitar hacia un escenario de plena libertad, independencia y respeto de los derechos humanos en ambos territorios.

De la misma manera, España debe trabajar de forma conjunta al resto de la Unión Europea para reforzar el mandato del Comité de Descolonización de la ONU e impulsar un Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo capaz de hacer frente a las nuevas formas de neocolonialismo extractivo que padece el Sur Global.

Ningún ser humano es ilegal

Juventud Verde entiende la libertad de circulación como un derecho humano, en consecuencia, defendemos que la migración no es un delito y que ningún ser humano es ilegal. Exigimos protección legal y estatus de residencia para los migrantes en territorio español y el respeto de sus derechos humanos. Luchamos por la completa abolición de las fronteras y el derecho incuestionable de toda persona a elegir su lugar de residencia. Es por ello por lo que exigimos con toda la fuerza de nuestro ánimo el desmantelamiento inmediato del entramado de Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las devoluciones en caliente.

Las actuales políticas fronterizas de España en línea con las de la Unión Europea institucionalizan el racismo y la estratificación social. Las agencias militarizadas como FRONTEX no son un recurso viable para hacer frente a los retos que plantean los actuales flujos migratorios globales. Europa se ha convertido en una fortaleza rodeada de concertinas y murallas mientras que los migrantes son explotados en los países receptores como mano de obra barata sobre la base de su situación de vulnerabilidad.

FRONTEX debe ser abolido, estamos en contra de la privatización de las fronteras españolas y europeas. Las políticas antimigratorias de FRONTEX se aplican fuera de cualquier contexto legal y representan un atentado contra los derechos humanos de las personas migrantes. Debemos entender la migración no como un problema, sino como un fenómeno estructural inherente a nuestra condición humana, que se ve impulsado por los fenómenos de desigualdad socioeconómica. Las políticas europeas deben centrarse en mitigar las razones reales de la migración forzada y ofrecer una ayuda sustancial.

España debe trabajar por la armonización de los procedimientos de asilo de la Unión Europea al tiempo que apoya activamente el programa de reasentamiento de refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Además, el Estado Español ha de comprometerse con el respeto de las personas migrantes y trabajar para evitar la estigmatización de quienes migran con especial atención a los menores no acompañados, objetivo declarado de los grupos y partidos de la extrema derecha de nuestro país. Solo dignificando la imagen que como sociedad tenemos de las personas migrantes podremos combatir los odios sembrados por la extrema derecha.

Economía verde

Juventud Verde, en línea con la Federación de Jóvenes Verdes Europeos, identificamos las causas fundamentales de la situación social y crisis medioambiental como situadas dentro del sistema económico actual. Creemos que el sistema capitalista, basado en la competencia desenfrenada, el consumismo, la explotación de los trabajadores y la maximización de beneficios, es insostenible e incompatible con los límites naturales de nuestro planeta, cada vez más en la escasez de varios recursos, y el objetivo de una economía que beneficie a todos. Este sistema impone deliberadamente costos sociales y ambientales en países de bajos ingresos, generaciones futuras y otras especies. Hace todo el trabajo reproductivo y de cuidados invisible, un trabajo realizado principalmente por mujeres. Crea desigualdades extremas y excluye a la mayoría de las personas de los procesos de toma de decisiones sobre cómo y qué se produce. Esto se debe a que depende de que algunas personas posean medios de producción y de vida con eso, mientras que otros tienen que trabajar para ganarse la vida. Esto crea injusticias dentro de las sociedades, así como entre ellas: división entre ricos y pobres, sur y norte globales, todos enraizados en el capitalismo. Las crisis que enfrentamos son el resultado del sistema patriarcal, racista y capitalista que está perturbando el bienestar humano y destruyendo nuestro medio de vida. En definitiva, representa una amenaza existencial para la humanidad.

La Juventud Verde vemos una necesidad urgente de una nueva visión del progreso que sea adecuada para el siglo que tenemos por delante. Para poner fin a la destrucción del medio ambiente y la pobreza humana, es fundamental cambiar la forma en que se construyen y definen nuestras economías. Necesitamos pasar del crecimiento económico al bienestar humano y planetario, y por ello hay que aplicar un nuevo sistema económico. Necesitamos ir más allá de indicadores como el producto interior bruto (PIB) y poner en el centro la calidad de vida y el equilibrio ambiental. Creemos que el cambio tecnológico a una industria y una economía sin residuos no es suficiente. Ni siquiera es posible, dada la naturaleza extractiva del capitalismo y la falta de los recursos necesarios para mantener indefinidamente la demanda actual. La economía verde y feminista que queremos construir implica un cambio radical para la democratización de la economía, la redistribución de la riqueza, y una transición justa. Es una economía feminista, lo que implica que de la protección social una prioridad y valora el trabajo de cuidado, realizado principalmente por mujeres, para las personas y el medio ambiente.

Modelos alternativos al crecimiento ilimitado

La economía no debe priorizar el crecimiento económico, las ganancias y el consumo, sino más bien la sostenibilidad ecológica, la justicia social, el bienestar humano y la igualdad. Debemos romper con la falacia impuesta por el capitalismo de que el desarrollo humano ha de ir obligatoriamente ligado al crecimiento económico. Más no siempre es mejor. Y menos desde la ceguera de los parámetros extractivistas actuales.

Los indicadores que utilizan actualmente los economistas no toman factores ambientales en cuenta. Por lo tanto, creemos que es hora de desarrollar y usar nuevos indicadores, que consideren factores como la degradación ambiental y desigualdad económica. El Índice de Progreso Real (IPR), por ejemplo, mide la calidad de vida desde una perspectiva holística en lugar de sólo el progreso económico. En esta línea, se debe avanzar en la creación de unos índices que reconcilien el progreso económico con la mejora social y ambiental, avanzando hacia la sostenibilidad.

El modelo de mercado crea recursos de propiedad privada, extrae de manera descontrolada recursos finitos y genera monopolios y desigualdades. Por otro lado, modelos alternativos, como la "economía del donut", el decrecimiento y la Economía para el bien común, proporcionan ideas para aplicar un sistema que sea realmente sostenible, justo y mejore la calidad de la vida.

Necesitamos mirar la economía de una manera nueva, desmantelando el mito del crecimiento ilimitado, poniendo fin a la acumulación de capital y priorizando la redistribución de la riqueza y medios de producción. Nos esforzamos por utilizar el Pacto Verde Europeo para recuperarnos de la crisis actual de manera sostenible: para fomentar una economía circular, seguridad y certidumbre económica, así como igualdad de género, en todos los ámbitos. La igualdad intergeneracional es también un valor fundamental para una economía verde y feminista.

Actualmente los gobiernos deberían guiar sus políticas económicas, como mínimo considerando los objetivos del Acuerdo Climático de París y la Agenda 2030. Sin embargo, ninguno cumple esos insuficientes mínimos, y esto es porque el sistema económico no puede funcionar de otra manera. Solo un cambio de sistema económico real nos acercará al objetivo de sociedades más justas, respetuosas del medio y adaptables.

Estructuras económicas

La estructura actual de la economía es fuente de injusticia, desigualdad y problemas ambientales. El monopolio que tienen algunas empresas internacionales impide la entrada de nuevos actores en el mercado. Cada vez es más difícil para los estados, y por tanto los ciudadanos, hacer a estas empresas transnacionales responsables de sus daños. Son uno de los guardianes contra el cambio. La Juventud Verde cree que, para dar un enfoque más sostenible y justo de la economía, nuestro sistema económico tiene que cambiar. Debe servir a los humanos, a los no humanos y a nuestros ecosistemas, no a los multimillonarios.

Muchos desafíos económicos surgen de grandes empresas que necesitan aumentar sus ganancias a toda costa constantemente para sobrevivir. Ello socava los derechos de los trabajadores y las normas ambientales, así como las pequeñas empresas locales y cooperativas de trabajadores. En España tenemos muchos ejemplos de grandes empresas que evitan pagar impuestos, reduciendo la capacidad del estado para prestar servicios públicos. Por lo tanto, pedimos que la economía se estructure de manera diferente. Compañías que se consideren demasiado grandes para quebrar o que posean monopolios deben dividirse. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) deberían tener más oportunidades para administrar sus negocios sin enfrentar la amenaza de las corporaciones multinacionales. Empresas que sirven a objetivos distintos a maximizar las ganancias, quienes operan simplemente con el fin de brindar servicios o crear empleos, son una solución.

Creemos que los propios trabajadores pueden desempeñar un papel más activo en la configuración de la economía. Nosotros demandamos que las empresas se rijan por las personas que trabajan en ellas. Un paso importante hacia este objetivo sería la ocupación de al menos el 50% de los puestos en los consejos de administración de la empresa por parte de los empleados. Otra herramienta es el modelo de negocio cooperativo ya que ayuda a democratizar la economía y cambiar el enfoque para colocar a las personas por encima de las ganancias y construir una economía más inclusiva. Deben establecerse mecanismos para facilitar a los trabajadores la transformación de sus empresas en cooperativas, especialmente cuando el propietario original planea cerrar la empresa. De esta forma, la Economía Social y Solidaria debe ser potenciada con políticas públicas que faciliten e impulsen su desarrollo, dando lugar a que la generación de bienestar social sea la norma y no la excepción por parte de los distintos actores económicos

Una economía verde y feminista rechaza la mercantilización y privatización de los bienes comunes. Las necesidades humanas básicas y los derechos sociales siempre deben estar garantizados y nunca deben depender del mercado. Esto se aplica especialmente en los casos de vivienda, salud, educación, alimentación y transporte. Es particularmente importante saber que el impacto de esta mercantilización y privatización es otro factor crucial de la desigualdad de género.

Para reducir el impacto de la economía en el medio ambiente, también es importante abordar los impactos negativos de la globalización. Si bien reconocemos algunos de sus beneficios, tiene tanto y consecuencias ambientales y favorece a las grandes empresas sobre las pequeñas empresas. Apoyamos, donde sea factible, reubicar la economía, comenzando con la producción de bienes esenciales como alimentos y medicinas generando sistemas económicos resilientes con una base territorial funcional, como puede ser la comarca en los casos de las zonas rurales.

El objetivo de la política económica no debe ser impulsar las exportaciones a toda costa, sino mejorar resiliencia y reducción de importaciones, dependencia de actores individuales e impactos ambientales. Cadenas de suministro transparentes y más cortas que se pueden inspeccionar más fácilmente para detectar explotaciones siguiendo el ejemplo de las leyes de diligencia debida y la obligación de presentar registros de contabilidad no financiera. Hay que asegurar que los productos extranjeros respetan las condiciones laborales de los trabajadores y son respetuosos con el medio. Esto último no puede estar basado en relaciones mercantiles, ya que perjudicaría nuevamente a los países del sur global. Por el contrario, tenemos la obligación de transferir tecnología y conocimientos que necesiten para reducir las desigualdades y descarbonizar su crecimiento. El problema que enfrentamos es, en definitiva, global.

Una economía sostenible

Transformar nuestra economía en una economía verde y feminista también significa reducir el consumo. y contaminación. La Tierra no puede soportar los niveles de consumo actuales. Por lo tanto, desafiar el consumismo debería estar en el centro de una transición justa.

Queremos cambiar la economía lineal, que se basa en un "tomar-hacer-desperdiciar" modelo, en una economía completamente circular. En una economía circular, los productos y los materiales se utilizan una y otra vez en lugar de desecharse. Creemos que podemos cambiar de una economía lineal a una economía circular basada en los siguientes principios: minimizar el uso de energía y recursos; preservar el valor en la economía; Previniendo residuos, materiales tóxicos y polución; mantener bienes y materiales en uso y en circuitos cerrados; asegurar la salud humana; y Fomentar la prevención de residuos.

Para que los consumidores puedan jugar un papel activo y cambiar sus hábitos de compra, defendemos el derecho a acceder a información más detallada, armonizada y confiable en materia social, ambiental, y los impactos climáticos de los bienes y servicios a lo largo de su ciclo de vida, incluida la durabilidad y reparabilidad. También enfatizamos la necesidad de cambio en relación con el "lavado verde" relacionado con los productos y afirmaciones ambientales falsas. Se debe fomentar la apertura de hardware y retirada de las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Para facilitar la reparabilidad de los bienes, los productores deben garantizar disponibilidad de repuestos durante todo el ciclo de vida del producto.

Hoy en día, la mayoría de los artículos y embalajes están diseñados para usarse una vez y desecharse. Esto crea vastas cantidades de contaminación y materiales de desecho. A medida que los vertederos superan la capacidad y los microplásticos contaminan en todo el planeta, existe una necesidad sustancial de cambio. Apoyamos un movimiento hacia una sociedad sin desperdicios, eliminando los plásticos de un solo uso y fomentando el desarrollo de la compra a granel.

El consumo está influenciado por una presencia publicitaria cada vez más visible. Apoyamos la regulación en publicidad, incluida la prohibición de anunciar los productos y comportamientos más contaminantes (p. ej. y transporte aéreo, consumo de carne). Apoyamos la prohibición de publicidad dirigida que utilice datos personales para influir en sus comportamientos siguiendo el llamado *microtarget*. También pensamos que el

impacto ambiental y visual de los anuncios debe abordarse, por ejemplo, limitando el tamaño de las vallas publicitarias en ciudades, asegurándose de que no estén iluminadas por la noche y prohibiendo las pantallas de publicidad digital, reduciendo con ello el exceso de estímulos de los cuales las personas están rodeadas en el medio urbano. Esta dispersión dificulta actitudes y acciones conscientes de consumo.

Una política fiscal justa

Pese a que ya hemos señalado que el sistema capitalista es incompatible con una sostenibilidad real, Los impuestos son necesarios para financiar los presupuestos públicos, mantener la calidad de los servicios públicos y recuperar el estado del bienestar, y financiar las inversiones necesarias para una transición a una economía sin justa y que tenga en cuenta los límites físicos de la naturaleza. Nos oponemos a la austeridad económica que se ha implementado en toda Europa. Se necesitan inversiones masivas en infraestructura social y urbana, sistemas de salud, educación y lucha contra el cambio climático. Los jóvenes, igual que todas las personas, necesitamos trabajos dignos para todas, vivienda pública, atención médica, más tiempo, transporte público gratuito y un planeta habitable.

Los impuestos también pueden ser una poderosa herramienta en sí misma, reduciendo las desigualdades y redistribuyendo la riqueza, además de permitir la financiación de los servicios públicos y el estado de Bienestar.

Exigimos una fiscalidad justa y una lucha más firme contra el fraude y la evasión fiscal. En España tenemos muchos ejemplos de claros fraudes fiscales por parte de millonarios, como recientemente ha vuelto a destapar la investigación “Papeles de Pandora”, o ejercicios de ingeniería fiscal como los de Inditex.

Defendemos la implantación de una política fiscal común europea para luchar contra la elusión y los paraísos fiscales, tanto dentro como fuera de la UE. Debería introducirse un impuesto de sociedades de la UE del 20% y avanzar hacia un impuesto mínimo global.

Los impuestos deberían utilizarse para reducir las desigualdades. Apoyamos la tributación progresiva sobre la renta, con mayor tributación para los contribuyentes más ricos. También apoyamos la introducción de un impuesto sobre el patrimonio para grandes fortunas. Finalmente, creemos que una mayor tributación de la herencia es clave para reducir la transferencia de desigualdades de una generación a la siguiente.

Ahora bien, pese a que el uso de impuestos indirectos se puede utilizar para

desincentivar el consumo de bienes dañinos con el medio, esto debe ser tratado con cuidado. La imposición de, por ejemplo, el diésel sin dar alternativas no desalienta su consumo, ya que es necesario en la sociedad actual, del mismo modo que lo es la energía. Por tanto, este tipo de medidas puede aumentar las desigualdades sociales y no contribuir a avanzar en la transición. Impuestos conductuales como el carbono fiscal, alimentos de alta huella, la fiscalidad de los artículos de plástico de un solo uso y la fiscalidad de coches, entre otros, pueden ser herramientas poderosas para fomentar el cambio si existe una alternativa plausible. Sin embargo, esto debe ir acompañado de impuestos directos a grandes productores, con prohibición de que sean pasados a los consumidores aguas abajo, y que sirvan para acometer las inversiones necesarias para ofrecer comida de calidad y proximidad, transporte público de calidad, local y europeo y puestos de trabajo.

Mercados financieros

Más de una década después de la Gran Recesión, los mercados financieros y los sistemas bancarios siguen siendo peligrosos y defectuosos. Los mercados financieros continúan provocando inestabilidad sistémica y desigualdad social. Las inversiones continúan fluyendo a industrias insostenibles, intensivas y de grandes emisiones de carbono. Los bancos actúan impunes dañando sociedades y el medio ambiente.

En España sufrimos a diario la presencia y poder de grandes fondos de inversión. No sólo fondos como BlackRock y Blackstone tienen intereses en la vivienda, limitando el acceso a jóvenes y otros trabajadores. También seguimos viendo su dependencia con viajes del Presidente del Gobierno, pidiéndoles más inversiones a estos y otros fondos. La cuestión es que este poder es inherente al sistema actual, como señalamos al principio.

Necesitamos cambiar las relaciones internacionales en materia económica. No podemos hacer la transición a una sociedad más justa y verde sin un sistema económico que asigne recursos allá donde se necesiten, impulsar la reducción de recursos y gestionar los peligros de forma igualitaria. La economía debe atender las necesidades de las personas, no al revés. Para lograrlo, la transparencia, la equidad y la sostenibilidad son claves. La tributación de las transacciones financieras es una herramienta importante para luchar contra el corto plazo y transacciones instantáneas. Apoyamos su introducción a nivel de la UE.

Necesitamos un sistema bancario global, y un sistema de regulación bancaria que responda a las necesidades actuales y priorice el bien público. El sistema bancario

necesita fomentar las inversiones en las economías verdes locales de hoy y de mañana, en lugar de apuntalar la contaminación industrial o el fomento de la especulación peligrosa. Debe abordar la desigualdad, tanto a nivel mundial como localmente, en lugar de atrincherarse. Y debe rendir cuentas a la sociedad, en lugar de ser ilegal y desregulado.

Mientras que llega eso, España debe impulsar inversiones públicas. Inversiones destinadas a crear empleo, descarbonizar la economía, reducir el consumo de energía y otros recursos y preparar las infraestructuras públicas y privadas para adaptarse a los cambios que ya sufrimos. Ha quedado demostrado, más con la crisis de la energía, que esas inversiones deben ser guiadas por el interés general, pero también quedarse bajo escrutinios públicos para que los servicios realmente beneficien a la gente y que los beneficios también los disfrutemos entre todas. En definitiva, evitar la especulación y reducir la desigualdad.

Economía digital

La economía digital se está convirtiendo en una parte central de la economía. Tiene el poder de cambiar nuestra sociedad, para bien o para mal. Debemos actuar con rapidez para garantizar que el desarrollo de la economía digital no siga siendo utilizada para vulnerar nuestros derechos y privacidad, o para eludir normativas como en el caso de los trabajadores de plataformas digitales, como los *riders*.

Necesitamos hacer de la digitalización una oportunidad para nuestra sociedad y asegurar que no se creen monopolios. El tamaño y la influencia de algunas de las grandes empresas digitales plantean preocupaciones y riesgos ya palpables. Apoyamos el desmantelamiento de los gigantes tecnológicos y la desmonopolización.

La infraestructura de comunicaciones físicas de Europa debe construirse, poseerse, operarse, como un recurso común. Esto permitirá una expansión más rápida, con más personas obteniendo acceso a un costo menor. En este sentido se debe trabajar también para favorecer la participación y visualización de los colectivos en riesgo de exclusión, evitando la marginalización que pudiera provocar la reducción de su presencia en redes debido al mecanismo de los motores de búsqueda o la dificultad en el acceso tecnológico, entre otras causas.

Si bien la digitalización se puede utilizar para abordar el cambio climático, la crisis de la biodiversidad y la contaminación, no debemos olvidar que la digitalización en sí misma no es una actividad climáticamente neutra. Desde servidores web, criptomonedas y

cables hasta antenas, teléfonos y computadoras, la digitalización se basa en la infraestructura que consume grandes cantidades de energía y, por lo tanto, contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. También requiere el uso de muchos elementos de tierras raras, cuya extracción provoca daños graves al medio ambiente.

La obsolescencia programada de los productos digitales agrava este fenómeno, además de generar grandes cantidades de desechos electrónicos que no se reciclan adecuadamente y, por lo tanto, contribuye a la contaminación del agua y el suelo.

Es necesario hacer mucho más para garantizar la implementación sostenible de la digitalización. Debemos recordar que esta es una herramienta para lograr nuestros objetivos más amplios y no un fin en sí mismo. El software libre, los repositorios colectivos digitales u otras innovaciones disruptivas de la dinámica competitiva en el terreno tecnológico son ejemplos de elementos transformadores.

Diversidad

Juventud Verde lucha por un feminismo interseccional, un feminismo que sea antirracista y antifascista, y que se inspira en los movimientos Queer y LGTBIQ+ y de los derechos de las personas con discapacidad. Un feminismo que reconoce la diversidad y las diferentes formas de privilegio y de opresión que se manifiestan en la sociedad. Nuestro feminismo no se limita a aplastar el patriarcado, sino también a todos los sistemas de opresión. Estamos en contra de las sociedades que sólo alimentan al poder dominante. Es por ello que queremos impulsar un modelo alternativo basado en la justicia y la equidad para las personas rechazadas y sucumbidas a la otredad por los sistemas de opresión, un modelo que socava activamente el poder dominante. Estos sistemas de opresión buscan dividirnos, controlarnos y perjudicar a todas las personas en la sociedad. Esto no se lo permitiremos. Luchamos contra cualquier tipo de discriminación o delito de odio por razón de nacionalidad real o supuesta, raza, etnia, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, ideología, discapacidad, clase, edad o especie. Nosotros reconocemos las diferencias y la diversidad entre las personas y la sociedad en España, y vemos esto como una riqueza.

Defendemos que las políticas deben ser creadas de la mano de las personas y los colectivos oprimidos y/o minoritarios. Por ello, exigimos leyes contra todo tipo de discriminación.

Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar la seguridad y la salud de las personas y los colectivos oprimidos y/o minoritarios. Mientras trabajamos por una España realmente acogedora e inclusiva para todas las personas, adoptamos un doble enfoque. En primer lugar, trabajamos por la justicia social y la igualdad real y efectiva, de los límites de las normas actuales, dentro de los sistemas que nos limitan. En segundo lugar, desde Juventud Verde cuestionamos los sistemas, los deconstruimos, para liberarnos de las normas sociales y gubernamentales además los límites que nos oprimen para vivir en libertad.

Los sistemas de opresión son una construcción social y, por tanto, pueden ser deconstruidos, con la ayuda de acción y organización colectivas. Podemos imaginar y dar vida a nuevos sistemas que funcionen para todas, todes y todos. Nosotros cuestionamos las fronteras creadas por el hombre, la arbitrariedad de los pasaportes y los permisos, y la dicotomía de género binario.

Interseccionalidad

Los sistemas globales del patriarcado, capitalismo, colonialismo y racismo, y sus subproductos, el capacitismo, la cis-heterosexualidad y el colorismo, entre otros, se entrecruzan para crear capas de opresión y desigualdad que se superponen y se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, las soluciones que impulsemos deben basarse en una perspectiva interseccional. Al abordar un caso concreto de opresión, no podemos perder de vista el marco más amplio en el que se produce la opresión, así como otros sistemas de desigualdad asociados a ella.

Cuando luchamos contra la desigualdad y abordamos los problemas de la sociedad, tenemos en cuenta que la identidad de una persona tiene muchas facetas y nos oponemos a los enfoques que definen a un grupo como homogéneo y basado en una identidad única.

Entendemos que todas las dimensiones de la identidad de una persona contribuyen a su acceso a la justicia y la igualdad. La desigualdad puede adoptar muchas formas, desde la falta de representación de una identidad específica en la esfera pública hasta la criminalización de las identidades. Nuestra aspiración es un mundo en el que se derriben estas desigualdades y que las personas puedan expresarse y expresar sus identidades libremente y sin miedo.

Cuando se proponen nuevas políticas en todos los niveles de gobierno, deben analizarse desde una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta las dimensiones individuales, sistémicas, institucionales e históricas de la desigualdad para garantizar que nadie se quede atrás.

Antirracismo

Hoy en día, la sociedad española sigue siendo profundamente racista. En este contexto, no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. El racismo no sólo se refiere a los discursos de odio y a los delitos de odio: es la discriminación y la opresión sistemáticas de las personas por su supuesta pertenencia a un grupo racial o étnico determinado. Incluye el antigitanismo, el antisemitismo y la islamofobia. Se construye a través de la perpetuación de prejuicios, así como de la creencia de que existen diferentes razas y que algunas son superiores a otras. En el caso del antisemitismo, esta "creencia" ha evolucionado hasta convertirse en una ideología conspirativa que explica el mundo y que ve todo el mal en los judíos y su destrucción como la liberación del mal. El antisemitismo es una presencia continua en la sociedad en su totalidad y las actitudes antisemitas pueden encontrarse en todos los grupos de la sociedad.

La sociedad española está construida sobre la continua opresión y discriminación de las personas racializadas, incluidas las personas negras, las personas latinas, las comunidades romaníes y nómadas, los musulmanes y los judíos. En la actualidad, las personas racializadas siguen siendo ciudadanos de segunda clase en España. Esta opresión es visible en las instituciones, en las calles y en la cultura. Las personas racializadas se enfrentan a la violencia policial y son discriminadas en todos los aspectos de la vida, desde oportunidades de trabajo hasta el acceso a la sanidad y la vivienda. El odio y la discriminación con respecto a religiones e individuos y grupos religiosos también constituyen una parte importante en el análisis de ciertos fenómenos sociales, como los delitos de odio, los actos discriminatorios y los sentimientos antirreligiosos, en un contexto antirracista. Aunque no estén relacionados con la raza y/o la etnia, se entrecruzan con otras partes de la propia identidad y también se confunden injustamente con la raza y/o la etnia.

La raza debe entenderse como una construcción social y como una categoría que se utiliza para discriminar contra las personas de color y otros grupos racializados, y no como una realidad biológica. El racismo en España tiene, entre otras, sus raíces en la historia colonial e imperialista. Las ideologías y desigualdades que creó siguen presentes hoy en día. Para abordar adecuadamente el racismo, España debe enfrentarse a su pasado colonial y reconocer el racismo presente en la historia, las sociedades, las culturas y las instituciones españolas. Una respuesta adecuada a esto

debe incluir reparaciones monetarias para las antiguas colonias del Estado español, así como la devolución de los objetos robados actualmente expuestos y conservados en los museos españoles. El debate sobre la restitución del arte colonial es una necesidad y una contribución clave para la descolonización de estas relaciones.

Dado que el racismo es un problema estructural y sistémico, las instituciones públicas y privadas deben revisar y cambiar sus estructuras y procesos. Juventud Verde apoya los mecanismos para dismantelar el racismo y lograr la justicia para las personas oprimidas por el racismo sistémico. Apoyamos la introducción de mecanismos de acción afirmativa que incluyan el acceso a la educación superior o a los empleos públicos. España debe luchar contra la discriminación en el acceso a la sanidad, el empleo, la justicia y la educación. Para garantizar que la población y, en particular, las próximas generaciones, se eduque sobre el racismo, deben diseñarse planes de estudio que abarquen las diferentes formas y apariencias del racismo, su historia, sus causas sistémicas y estructurales causas y quiénes se han beneficiado de él.

Equipados con estos conocimientos y herramientas para reflejar su situación y circunstancias de vida, los individuos tienen que reconocer sus propios privilegios, educarse y solidarizarse con personas y comunidades afectadas por el racismo.

Más concretamente, Juventud Verde cree firmemente que abordar la opresión racial es la clave para lograr no sólo la justicia social, sino también la justicia climática y la equidad. Los activistas racializados han estado en la vanguardia de las luchas por la justicia. En sus luchas, o bien son invisibilizados por las personas blancas o han sido objeto de una violencia estatal desproporcionada. Es esencial reconocer y luchar activamente contra los mecanismos que han dado lugar a la exclusión y el silenciamiento de los activistas racializados.

Derechos de las personas con discapacidad

Juventud Verde apoya los derechos y las luchas de las personas con discapacidad. La discapacidad puede referirse a deficiencias físicas o intelectuales y puede incluir enfermedades mentales y/o crónicas. El capacitismo es la discriminación o los prejuicios sociales contra las personas con discapacidad, como asumir que una persona con discapacidad no tiene las mismas capacidades que las personas sanas para desempeñar ciertas tareas o roles en la sociedad.

Tener una discapacidad no debe limitar las opciones de una persona para estar presente en los espacios públicos, interactuar con el mundo que les rodea y participar en actividades sociales, políticas y culturales. Juventud Verde apoya el modelo social de la discapacidad, que considera que los entornos sociales excluyen y perjudican a las personas, les impiden ejercer su autonomía y reducen la igualdad, en lugar de la propia imparcialidad de la persona

Para eliminar estas barreras, Juventud Verde apoya un enfoque holístico para aumentar la accesibilidad que sitúe a las personas con discapacidad en el centro del desarrollo de las políticas. Las políticas deben ser creadas por ellas y para ellas. Juventud Verde reconoce que la discapacidad es única para cada individuo y su propia experiencia, y que no puede haber una política o un enfoque sanitario único para todos.

Creemos que la lengua de signos española debería ser reconocida por todo el Estado español como lengua oficial, incluyendo las variables lingüísticas de las comunidades sordas en regiones con lengua cooficial, y que el acceso a la lengua de signos, el braille y a otros métodos de comunicación debería ampliarse. Juventud Verde también cree que deben eliminarse todas las barreras que impiden a las personas discapacitadas acceder a sus derechos civiles y políticos; estas pueden incluir barreras físicas y sociales.

En lo que respecta al tratamiento sanitario de las personas con discapacidad, los profesionales médicos deben trabajar sobre la suposición de que las personas son capaces de dar su consentimiento, a menos que se les informe de lo contrario. Los profesionales de la medicina no deben proceder a ninguna forma de tratamiento sin solicitar primero el consentimiento de la persona que recibe el tratamiento.

Género

Juventud Verde trabaja por un mundo en el que las personas puedan prosperar y sepan que es seguro ser ellas mismas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. La violencia de género es una brutal violación de los derechos humanos. Afecta a personas de todos los orígenes sociales y económicos en toda España. Las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres LGTBIQ+, las mujeres inmigrantes y las mujeres pobres y de clase trabajadora son las que tienen más probabilidades de estar en riesgo y se enfrentan a los mayores obstáculos para obtener ayuda.

La exclusión histórica y sistemática de los géneros oprimidos en todos los niveles de la toma de decisiones políticas, desde las instituciones locales hasta las europeas, tiene que acabar de una vez por todas. Diversos mecanismos, como las cuotas, pueden ayudar a corregir esta situación y garantizar la representación proporcional de todas las identidades de género en las asambleas de todos los niveles de gobierno en España y Europa.

Nuestra aspiración a largo plazo es un mundo fluido. Reconocemos que las etiquetas, aunque nos ayudan a identificar cómo luchar por los derechos y la justicia en un sistema construido contra nosotres, no pueden representar el espectro de identidades y expresiones que encarnamos. Nuestra tarea a corto plazo es trabajar por los derechos LGTBIQ+, trabajar por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, luchar contra la violencia de género y seguir defendiendo la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad: en el hogar, en el trabajo, en política, etc. Trabajamos por un mundo en el que todas las personas tengan derecho a vivir libremente según su identidad y expresión de género, y el derecho a la autodeterminación y a la autonomía corporal.

Salud, derechos sexuales y reproductivos y lucha contra la discriminación y la violencia de género

La salud y los derechos sexuales y reproductivos deben formar parte de todos los programas educativos y deben aplicarse efectivamente en todas las escuelas. El plan de estudios de educación sexual debe ser sin prejuicios, positivo en cuanto al sexo, centrado en el consentimiento y lo suficientemente completo como para cubrir la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. Deben asignarse más fondos e investigación a la educación sexual y a la salud reproductiva.

Exigimos una atención sanitaria sexual y reproductiva gratuita, accesible, de calidad y segura para todas las personas. La atención sanitaria debe basarse en los derechos humanos, la autonomía corporal y el consentimiento informado para todas, especialmente para los grupos más vulnerables, como las personas trans, las personas con discapacidad, los sin papeles y los inmigrantes. Además, debe haber una financiación adecuada para la investigación médica específica de género, ya que las mujeres, las personas trans y las personas no conformes con el género no suelen estar presentes en la investigación médica en absoluto o sólo como objetos patologizados. Esto debe cambiar.

La atención sanitaria sexual y reproductiva gratuita y accesible debe incluir la anticoncepción accesible y gratuita para todas, así como la reproducción médicamente asistida. También se debe invertir más dinero para la investigación de nuevas formas de anticonceptivos, como la píldora masculina. La discriminación del impuesto rosa debe terminar. Los productos menstruales deben ser gratuitos y de libre acceso en todas partes, incluidas las escuelas, las universidades y los aseos públicos. Dondequiera que haya papel higiénico gratuito, debe haber productos menstruales gratuitos. Se realizarán aseos de género neutro en todos los edificios de acceso público y para los empleados. En los edificios grandes, habrá al menos un aseo en cada planta que sea accesible para todas. La escasez de aseos no debería ser un problema para nadie. Cada año mueren miles de personas por la criminalización y la falta de acceso al aborto. Prohibir el aborto sólo causa un mayor daño a quienes lo buscan, que luego sufren graves riesgos sanitarios, legales y económicos para abortar ilegalmente. Condenamos todos los intentos de restringir el acceso al aborto. Abogamos por un aborto gratuito, accesible, sin prejuicios, de buena calidad, seguro legal y local.

Deben prohibirse las cirugías no consentidas en personas intersexuales. Los Estados deben prohibir todas las prácticas deshumanizadoras y ofrecer reparaciones a todas las personas trans e intersexuales que han sido obligadas a renunciar a su autonomía corporal de esta manera.

Hay que acabar con la estigmatización del VIH. El tratamiento del VIH es muy eficaz para reducir la transmisión del VIH y las personas con una carga viral indetectable no pueden transmitir el VIH. Indetectable es igual a intransmisible. Deben destinarse más fondos a la educación y a la concienciación sobre el VIH y su prevención, así como a la investigación y el tratamiento. El tratamiento, la prevención y las pruebas del VIH deben ser gratuitas y de acceso universal.

Las mujeres y las niñas (cis y trans) suelen estar expuestas a graves formas de violencia física, como la violencia doméstica, la agresión sexual y la violación. Exigimos que la definición legal de violación respete la autodeterminación individual. Exigimos que la violación se defina por la falta de consentimiento, no por la amenaza de violencia.

Reiteramos la aplicación y defensa en España del Convenio de Estambul. El Convenio establece medidas para hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, reconociendo esta violencia como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. España siempre deberá proporcionar información clara y concisa para las víctimas en un idioma que entiendan, refugios accesibles e inclusivos y líneas telefónicas de ayuda.

Reconocemos la discriminación de las mujeres en el mercado laboral por motivos de género, incluida la infravaloración de las ocupaciones históricamente dominadas por las mujeres. Por lo tanto, exigimos la misma remuneración por un trabajo igualmente valioso y el fin de la discriminación basada en el embarazo y la paternidad.

Derechos LGTBIQ+

Los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersexuales y asexuales siguen siendo atacados en nuestro sistema patriarcal y capitalista. Incluso hoy en día, los gobiernos conservadores intentan arrebatar a las personas LGTBIQ+ las libertades y los derechos que tanto les ha costado conseguir. La LGTBIfobia puede alimentar la incitación al odio y los delitos de odio y debería ser penalizada.

Toda persona debe tener derecho a vivir de acuerdo con su orientación sexual, identidad de género y expresión de género libremente y sin miedo. Las llamadas "terapias de conversión" son deshumanizadoras y deben ser prohibidas y perseguidas inmediatamente. Las relaciones de las parejas del mismo género y sus familias deben gozar de igual reconocimiento. Todas las parejas tienen derecho a la vida familiar. Esto incluye el derecho a la adopción y a la acogida, el derecho de todas las personas con un útero a tener acceso a la reproducción médicamente asistida y el derecho de acceso en igualdad de condiciones a la donación de espermatozoides, independientemente de la edad, de su orientación sexual, salud o situación sentimental. Los tratamientos de Fecundación In Vitro deben ser igualmente reembolsables para todas las parejas. Los matrimonios y las uniones civiles deben estar abiertos a todas las parejas, y los reconocidos en un país europeo deben ser también y automáticamente reconocidos en España.

Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, ser no binario es válido, y los derechos trans son derechos humanos. Las evaluaciones obligatorias de salud mental violan la dignidad y el derecho a la autodeterminación de las personas trans y deben prohibirse. Exigimos procedimientos legales de reconocimiento de género para todos los géneros y para ninguno, y el derecho a cambiar de nombre de forma autodeclarativa e incondicional. Estos procedimientos deben ser rápidos, transparentes, accesibles, gratuitos, basados únicamente en la autodeterminación individual y sin restricciones de edad. Además, pedimos que se eliminen todos los marcadores de sexo en los documentos de identidad, incluidos los pasaportes.

Todas las políticas descritas deben de ser accesibles también para las personas migrantes, sin papeles y las personas solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen por su identidad de género u orientación sexual.

Libertad religiosa

Las sociedades pluralistas y diversas dependen de que se habilite un espacio seguro en el que cada persona es libre de creer o no creer, practicar sus creencias, observar sus creencias y organizarse para sus creencias. Luchamos contra la islamofobia y el antisemitismo, y condenamos cualquier tipo de discriminación y discurso de odio contra las personas por su religión. Nosotros creemos en una sociedad pluralista y diversa construida sobre el diálogo. El derecho a la libertad religiosa y el derecho a practicar la religión libremente deben estar protegidos por la legislación nacional. Nos oponemos a la idea de que la religión es, por naturaleza, una cuestión divisoria y una fuente de tensiones, y que las personas deben ocultar sus creencias religiosas o se avergüencen de ellas.

Defendemos un Estado laico en el que haya una separación entre la religión y el gobierno, y en el que las leyes religiosas no se consideren por encima o al margen del derecho civil. Creemos que los Estados no deben dar un trato preferente a ninguna religión ni a las personas y organizaciones religiosas sobre otros ciudadanos y organizaciones benéficas, ya que esto crea un sistema discriminatorio. Los trabajadores deben tener derecho a celebrar las fiestas de su propia religión sin sufrir discriminación o penalización. El uso de símbolos religiosos no debe utilizarse como razón para excluir personas de la educación, el trabajo, los servicios o los espacios públicos.

Derechos culturales y étnicos en el estado

En Juventud Verde defendemos los derechos culturales.

Las políticas coloniales, discriminatorias y asimilacionistas de España han dejado a las minorías nacionales muy marginadas y vulnerables. Defendemos el derecho de los individuos y las comunidades, incluidas las minorías nacionales, a practicar y preservar sus culturas, incluidas sus lenguas, religiones, formas de arte y modos de vida.

Las minorías nacionales deben contar con una sólida protección jurídica, una financiación suficiente y estable y una autonomía cultural que apoye sus esfuerzos por revitalizar, conservar y desarrollar sus lenguas, culturas y formas de vida. Entre estos grupos culturales y étnicos encontramos sobre todo a la población gitana-romaní (étnico) y las distintas formas de cultura, lenguas y hablas, y tradiciones que existen en España.

Antiespecismo

En Juventud Verde, sostenemos que el especismo, esa actitud que implica dar un trato injustificado y comparativamente inferior a aquellos que no pertenecen a nuestra propia especie, es éticamente indefendible. Al favorecer de manera indebida los intereses humanos sobre los de otros seres sensibles, caemos en una mentalidad discriminatoria que se asemeja a prejuicios históricos como el racismo y el sexismo, que en su momento se utilizaron para justificar la desigualdad. El especismo, de manera análoga, perpetúa una jerarquía arbitraria que sitúa a los humanos en la cima.

El principio de igual consideración de los intereses defiende que los intereses de todos los seres sensibles deben tener el mismo peso moral. Esto no implica tratar a todos los seres de manera idéntica, sino reconocer la importancia de considerar los intereses y el bienestar de cada individuo en función de su capacidad para experimentar sufrimiento o placer.

Rechazar el especismo no es menospreciar las cualidades únicas de la humanidad, sino adoptar una perspectiva más inclusiva y empática que valore toda forma de vida. Al hacerlo, afirmamos la interconexión de todos los seres vivos y reconocemos el imperativo moral de tratar a los demás con respeto y consideración. Adoptar una perspectiva no especista promueve una relación más armoniosa con el mundo natural, impulsando la empatía, la sostenibilidad y un futuro en el que la compasión trascienda las fronteras arbitrarias.

Ecología

La ecología está presente en todo este documento y es la base de nuestro pensamiento verde. La tierra tiene recursos limitados, y tenemos que planificar nuestro modelo social de forma sostenible y basado en estos límites.

Valor de la Naturaleza

Juventud Verde cree que la naturaleza tiene un valor intrínseco. Todos los conflictos entre la sociedad y la naturaleza son producto de una percepción insalubre, insostenible y poco ética de la naturaleza. La sostenibilidad a largo plazo, la preservación de los ecosistemas locales y la estabilidad de los ciclos ecológicos, deben priorizarse y marcarse como condiciones necesarias en la relación con la naturaleza de la cual somos parte.

Todas las cuestiones ecológicas deben entenderse y resolverse de forma holística e interrelacionada, en lugar de reducirse a cuestiones técnicas aisladas dentro del ámbito del ecologismo que se puedan resolver mediante mejoras tecnológicas.

Dado que la naturaleza es un sistema muy complejo, no tenemos ni razón ni justificación para tener una fe ciega en que la tecnología nos hará comprender plenamente todas las crisis ecológicas, y mucho menos resolverlas a través de medios técnicos en lugar de hacerlo a través de un cambio social integral.

Queremos también aumentar la superficie de espacios protegidos en España, así como los recursos destinados a la vigilancia y preservación de estos.

Cambio climático

El cambio climático es una de las crisis más grandes y urgentes de nuestra sociedad actual. Sin una acción radical inmediata a escala global, la humanidad se enfrenta a escenarios climáticos catastróficos con casi total seguridad. Episodios extremos y patrones climáticos nunca vistos durante el desarrollo de la civilización, se convertirán en la norma, teniendo efectos adversos potencialmente devastadores en los seres humanos, los animales y las plantas.

La comunidad científica no puede predecir exactamente cuánto más podemos trastocar el delicado equilibrio climático antes de alcanzar puntos de no retorno en los que distintos fenómenos se retroalimentarían de forma casi imparable hasta una subida de varios grados en la temperatura media global. Por lo tanto, necesitamos urgentemente un acuerdo global jurídicamente vinculante y suficientemente ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con las recomendaciones científicas.

Dicho acuerdo debe prepararse y apoyarse en estrategias y medidas ambiciosas a nivel nacional, regional y local. Con tal de garantizar los principios de justicia global, y evitar que la inacción climática siga siendo un negocio rentable, queremos aplicar aranceles climáticos a aquellos países o empresas que se resistan a seguir el mencionado acuerdo de reducción de emisiones. Creemos que los países del Norte Global deben reconocer que la mayor parte de las emisiones mundiales de CO₂ per cápita se originaron en sus países y actualmente continúan haciéndolo, lo que supone una brecha cada vez mayor con el Sur Global (en cuanto a la responsabilidad y necesidad de reparación).

Desde Juventud Verde exigimos la implementación de un impuesto al carbono para mitigar sus emisiones y tomar conciencia del verdadero coste de nuestras actividades.

Sin embargo, no creemos que los mecanismos de regulación de los mercados por sí solos puedan alcanzar un nivel de emisiones dentro del umbral aceptable según la ciencia en los plazos que manejamos.

Desde todas las administraciones debemos redoblar esfuerzos para garantizar que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se reduzcan rápidamente para intentar que no superemos un aumento de la temperatura de 1,5 °C. Esta cifra de 1,5 °C debe ser siempre coherente con las recomendaciones científicas más recientes teniendo en cuenta el principio de precaución descrito por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Biodiversidad

La biodiversidad es fundamental para la salud de los ecosistemas y de gran importancia para nuestro bienestar, tanto física como psicológicamente. Una buena biodiversidad supone además un gran valor económico, supone un insustituible recurso medicinal y para muchas personas, tiene también un importante valor espiritual y cultural.

Hoy en día nos enfrentamos simultáneamente a las crisis ecológicas tanto por el cambio climático como por la enorme pérdida de biodiversidad. Ambas crisis están directamente relacionadas con el insostenible modelo económico actual, en el que consumimos de manera excesiva e irracional los recursos, usamos productos químicos tóxicos, y entendemos los ciclos de producción de forma lineal, produciendo y acumulando residuos sin parar. Uno de los aspectos más devastadores de la pérdida de biodiversidad es la actual extinción masiva de especies, causada por una serie de problemas graves y profundamente arraigados, como la destrucción de los hábitats, el cambio climático, los cambios en el uso del suelo, la introducción de especies invasoras, la contaminación genética, el monocultivo y la sobreexplotación. Estos procesos han sido acelerados en las últimas décadas por el modelo económico imperante y están detrás del origen de enfermedades como la COVID19, un modelo de desarrollo que podría llevar a más pandemias, en el futuro, si no hay una acción colectiva decidida por cambiar de tendencia.

En Juventud Verde creemos que se deben adoptar medidas de amplio alcance para hacer frente a estos problemas, incluidos los cambios fundamentales en la raíz de nuestros sistemas económicos y en nuestro modo de vida. Tenemos que reducir rápidamente la explotación y despilfarro de nuestros recursos naturales y regular estrictamente el uso de diversos productos químicos, además de prohibir otras prácticas insostenibles. Hay que tomar medidas radicales inmediatas en todos los niveles de la sociedad, desde el local hasta el mundial, y creemos que nuestro país está bien posicionado para tomar la delantera en esta transición dado nuestro gran potencial. El papel de los países europeos es especialmente importante teniendo en cuenta el daño histórico que Europa ha infligido a los sistemas ecológicos mundiales. Nuestro país debe, por tanto, mostrar responsabilidad y adoptar un enfoque holístico de la biodiversidad, reconociendo los vínculos directos con el cambio climático, la agricultura, la contaminación, el transporte y las cuestiones energéticas.

Agricultura, alimentación y vida rural

Las prácticas agrícolas más extendidas en nuestros días son altamente demandantes de energía. La conocida como agricultura industrializada se está convirtiendo en un grave problema, ya que es responsable de la destrucción de ecosistemas, de dañar seriamente la biodiversidad y de la pérdida de tierras fértiles.

Este modelo está ligado a un mercado de semillas centralizado, con semillas de alto rendimiento, que necesitan un gran aporte de productos químicos y fertilizantes para crecer y que no son capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes o plagas y enfermedades.

Este cambio de prácticas agrícolas por todo el mundo va de la mano con la globalización de los mercados de alimentos, que se centra en la rentabilidad por encima de la sostenibilidad. Para competir en este mercado se reducen los salarios y se mecanizan los métodos de trabajo. La inercia de este sistema nos conduce a monocultivos y la pérdida de trabajo en el rural conduce a un reparto insostenible de población, recursos y servicios en todo el territorio.

El procesamiento y la distribución de alimentos se han monopolizado también, creando obstáculos significativos para los pequeños agricultores que no tienen el dinero o infraestructura para invertir en las máquinas necesarias en los estándares de las grandes empresas de alimentos.

Dado que el sustento más básico e importante de miles de millones de personas se está desmoronando y la seguridad alimentaria del resto de la sociedad está gravemente amenazada, en Juventud Verde exigimos medidas inmediatas: por un lado, queremos poner fin a las políticas insostenibles, injustas, centralizadas e ineficientes energéticamente, y a su vez, aplicar políticas basadas en la economía circular y de cercanía, que son por definición mucho más sostenibles, justas y energéticamente eficientes, además de descentralizar y democratizar el sistema, otorgándonos mayor soberanía alimentaria. La agroecología como paradigma social y agrícola debe guiar esta transformación hacia sistemas alimentarios que tengan en su base los factores ecológicos y humanos en la producción, transporte y consumo de alimentos

Queremos apoyar las actividades agrícolas ecológica y socialmente sostenibles. La agricultura ecológica debe convertirse en la forma habitual de producción de alimentos.

También consideramos importante acercar la producción de alimentos a los consumidores y hacerla visible en la vida cotidiana de las ciudades. En este sentido, la

jardinería comunitaria y la agricultura urbana, aunque generalmente a pequeña escala, nos ayudan a repensar nuestra relación con la comida, además de ser una forma positiva de recuperar el espacio urbano no utilizado. Se necesita una producción local de semillas, no de semillas modificadas genéticamente o semillas de alto rendimiento. No se debe limitar el derecho a almacenar y sembrar semillas, y no deben permitirse patentes de semillas tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal.

Las prácticas pesqueras insostenibles en la UE son un grave problema para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. La sobrepesca está llevando a los caladeros a una situación crítica. La piscicultura es también una amenaza para la biodiversidad y los peces silvestres. Contamina océanos, mares y lagos de forma masiva. Por lo que no consideramos que sea una alternativa deseable al modelo de pesca intensivo. Creemos que la pesca intensiva debe cesar y ser sustituida de nuevo por técnicas de bajo impacto y de bajura, mucho más sostenibles y menos demandantes de energía y combustibles y que produce muchos menos residuos.

Las políticas agrícolas actuales están al servicio de la agricultura industrializada y la agricultura orientada a la exportación. Hay que poner fin a esto. El dinero y políticas públicas deben apoyar estilos y prácticas agrícolas que garanticen la biodiversidad y un medio ambiente sostenible. De esta manera, apoyar a las zonas rurales, la economía de proximidad y la agricultura a pequeña escala, permitiendo que las comunidades locales sean autónomas en relación con los alimentos. Para luchar contra el cambio climático se debe fomentar la producción de alimentos de origen vegetal para el consumo humano en lugar de orientar nuestro sistema a la producción masiva de productos cárnicos.

Bioética y espectáculos con animales

En Juventud Verde pensamos que la vida tiene valor por sí misma. Además del valor obvio de los ecosistemas en conjunto, los seres vivos deben ser tratados con respeto. Nos oponemos firmemente a cualquier abuso o cosificación de los seres vivos, humanos o no humanos.

En esta línea el vegetarianismo y el veganismo son preferibles a otras dietas, no solo por sus beneficios para la salud o el medio ambiente, sino también por respeto a la vida misma.

Queremos fomentar un estilo de vida en el que se reduzcan al máximo o se eliminen los productos de origen animal. Creemos que una buena legislación y la correcta distribución de recursos públicos puede ayudar a reducir el consumo de animales en todas las etapas de la vida, y en las propias instituciones públicas.

Alentamos firmemente el desarrollo de alternativas a la experimentación con animales en los ensayos científicos y médicos que ayudan a salvar vidas. Sin embargo, en todas las demás ramas de la industria y de la ciencia deben prohibirse los ensayos con animales. Además, demandamos una ganadería sin dolor, especialmente en la cría de animales agrícolas.

Creemos que la caza no es un pasatiempo tolerable y que no atiende a motivos de control de poblaciones de especies, además de cruel es una práctica que pone en riesgo el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas. Necesitamos más reservas naturales y programas para la conservación de especies en peligro de extinción.

Nos oponemos a todo tipo de ejercicios de tortura animal como todo lo relacionado con la tauromaquia. Las administraciones españolas no pueden seguir tolerando y apoyando esta clase de prácticas arcaicas y que no representan el sentir mayoritario de la sociedad. La tortura ni es arte, ni es cultura. Un acto de barbarie como es la tortura de un animal para alborozo del público no es en ningún caso un espectáculo apto para el público infantil, es absurda la actual permisividad de las administraciones con la presencia de menores en espectáculos taurinos.

Queremos abolir la presencia de animales en espectáculos de toda índole, con especial atención a la actividad circense y las becerradas. Los zoológicos y otras áreas donde

los animales son enjaulados por y para el entretenimiento de las personas deben ser abolidos. Los esfuerzos de conservación deben desvincularse de la industria del entretenimiento mediante animales, prácticas que consideramos denigrantes y a menudo tornan en abusivas.

La ecología como fundamento de nuestra sociedad

Tomar conciencia de los límites materiales de nuestras sociedades y economías, nos obliga a ver todas las políticas y todos los aspectos de la sociedad con un “filtro verde”. Los movimientos verdes hemos sido los primeros, aunque esperemos que no los últimos, en darnos cuenta de esta necesidad y de replantear por completo nuestras sociedades y economías.

El consumo de recursos no renovables siempre ha sido y sigue siendo una alternativa que funciona en corto plazo, sin embargo, la destrucción y el daño a la naturaleza provocado por este consumo pueden ser para siempre. Como sociedad, debemos reconocer el valor a largo plazo de la naturaleza que se destruye para obtener beneficios en el corto plazo. Debemos replantear nuestro funcionamiento como sociedad para poner en valor y como prioridad estos beneficios a largo plazo, en comunión con los recursos disponibles y renovables en cada momento.

Educación

Derecho fundamental y pilar del modelo de país

Desde Juventud Verde consideramos la educación como un derecho humano universal y fundamental para el pleno desarrollo de todas las personas, basado en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la educación es uno de los pilares principales de nuestro modelo de país, que vertebra la sociedad y garantiza el desarrollo.

Debemos tener un modelo educativo público que actúe como el motor de transformación y progreso de nuestra sociedad, que forme a una ciudadanía crítica, participativa, autónoma y libre. Para ello, es necesaria la generación de Cultura, de Ciencia e Innovación y su acceso a todas las personas, independientemente de su posición socioeconómica, que garantice así una sociedad del conocimiento.

El Estado debe garantizar unas políticas educativas públicas que contribuyan a construir una sociedad más igualitaria y más justa, con mayores oportunidades y progreso, a través del acceso y la permanencia a la formación en todos los niveles educativos, desde los primeros años hasta consolidar un sistema de formación a lo largo de la vida.

La educación a la infancia y la juventud adquiere una importancia esencial en nuestro modelo de país, debido a la relevancia que adquiere en el desarrollo personal, en la preparación para su futuro profesional y laboral y como actor fundamental en la democratización y construcción de una sociedad más justa, plural e igualitaria.

Por todo ello, Juventud Verde defiende una educación, en todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de Idiomas; y Educación Universitaria), íntegramente pública, que sea gratuita, inclusiva para todas las personas, desde una formación laica y que proporcione un servicio de calidad, garantizando así la justicia social.

Políticas públicas para fortalecer la educación

Las sucesivas crisis económicas y sociales que hemos sufrido en nuestro país en las últimas décadas y las consecuentes medidas políticas tomadas por los diferentes gobiernos han provocado una precarización de las personas jóvenes y han perseguido un desmantelamiento progresivo del sistema educativo público, atacando de esta manera al desarrollo de la juventud y su inserción social y laboral. Las elevadas tasas de abandono escolar y las dificultades de acceso a los diferentes niveles educativos, así como su permanencia en el sistema, han contribuido a esta precarización y a una reducción de expectativas de progreso.

Desde Juventud Verde apostamos por una fuerte inversión pública de recursos en el sistema educativo que garantice suficientes infraestructuras para todo el estudiantado, así como los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo las clases, manteniendo unas ratios profesorado-estudiantado óptimo que permita una educación individualizada, con unas condiciones laborales del personal docente dignas y con la calidad educativa suficiente.

Apostamos por una educación exclusivamente pública, poniendo fin así a la educación concertada y privada, destinando todos los recursos necesarios para ello, que garanticen la máxima calidad educativa y el acceso a toda la infancia y juventud independientemente de su condición socioeconómica. Además, debe ser laica, no teniendo cabida en nuestro sistema educativo ni en nuestras aulas ningún tipo de confesión religiosa.

Nuestro sistema educativo debe contribuir a la vertebración del Estado, garantizando la formación de todas las personas sin tener en cuenta su origen o lugar de residencia, especialmente en los entornos rurales. Se debe proporcionar la suficiente infraestructura y los recursos educativos necesarios en todos los territorios, afrontando así el reto demográfico que tiene nuestro país.

Para ello, se deben desarrollar estrategias educativas, no solo en el ámbito estatal, sino también a nivel autonómico y municipal, coordinadas entre las diferentes Administraciones, para todos los niveles educativos, desde la educación obligatoria, la Formación Profesional, las Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de Idiomas y la universitaria; que permita al sistema educativo adaptarse de manera dinámica a las transformaciones sociales y el desarrollo tecnológico.

Juventud Verde defiende un Pacto de Estado por la Educación, acordado con las organizaciones sociales, con el profesorado, el estudiantado y todo el personal educativo, y las diferentes organizaciones políticas; poniendo en el centro el diálogo social. De esta manera, se podrán desarrollar políticas educativas estables y de consenso, que eviten cambios irregulares y constantes en cortos periodos de tiempo.

Gratuidad del sistema educativo, becas y ayudas al estudio

Reivindicamos un modelo educativo completamente gratuito en todos los niveles, eliminando de esta manera la primera barrera económica de acceso a la educación, así como la eliminación de las tasas y gastos burocráticos que suponen un esfuerzo económico inaccesible para muchas personas y familias, que además no están incluidos estos gastos en las becas y ayudas al estudio. Del mismo modo, la educación universitaria y la educación superior deben ser gratuitas y libres de tasas académicas.

En Juventud Verde concebimos las becas y ayudas al estudio como una herramienta fundamental de redistribución de la riqueza para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades y condiciones a la educación en todos los niveles. Por ello, las becas son un derecho subjetivo que se debe basar exclusivamente en la situación socioeconómica de los y las jóvenes, no entendiéndose en ningún caso como un préstamo o un premio académico, por lo que rechazamos al completo los requisitos académicos de las becas y la devolución de estas por no cumplirlos.

Es necesario garantizar que las cuantías económicas de las becas y ayudas al estudio sean suficientes y permitan la emancipación plena de los y las jóvenes, cubriendo todos los gastos desarrollados a lo largo del curso académico para el pleno disfrute de la experiencia educativa; así como que haga frente al coste de oportunidad que supone el realizar unos estudios postobligatorios. Para ello, se debe implantar la gratuidad de los libros de texto y suficientes ayudas para sufragar los materiales necesarios.

La alimentación de la infancia y la adolescencia es esencial, por ello reivindicamos la necesidad de un fuerte sistema de becas comedor que garantice una nutrición equilibrada y necesaria para las niñas y los niños, promoviendo así un correcto desarrollo educativo, una mayor conciliación familiar y combatiendo las desigualdades socioeconómicas.

La movilidad del estudiantado es imprescindible en el enriquecimiento cultural y el desarrollo personal, por eso se debe asegurar que el estudiantado pueda desarrollar

unos estudios postobligatorios independientemente de su lugar de residencia y su situación personal. Por ello, las becas de transporte y las ayudas al alquiler deben fortalecerse para, no solo combatir la subida abusiva de los precios de los alquileres, sino para poder permitir a los y las jóvenes trasladarse fuera de su domicilio para estudiar.

Además de la movilidad estatal, las experiencias internacionales deben ser accesibles a todas las personas sin importar su situación socioeconómica y, al igual que la Unión Europea, se debe apostar de manera decisiva por la cofinanciación de programas de movilidad como el Erasmus+, que permita a todo el estudiantado disfrutar de estancias internacionales, no solo para ayudar en el progreso social, sino también para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y formar ciudadanos y ciudadanas internacionales y multiculturales.

Para que el sistema de becas y ayudas sea realmente eficiente y sirva para su propósito, se debe agilizar, digitalizar y desburocratizar al máximo posible, garantizando que el abono de las cuantías económicas se realice antes del comienzo del curso académico para que el estudiantado pueda acceder y permanecer en los estudios, sin tener que adelantar dinero que en muchos casos no tiene, o incluso solicitar préstamos. También debería estudiarse la posibilidad de implantar sistemas como las becas salario.

Por último, el acceso a la información de manera clara, transparente e inclusiva se debe garantizar en todos los niveles. Para ello, se debe impulsar un sistema integrado a nivel estatal, y desglosado por Comunidad Autónoma, de todas las becas y ayudas al estudio disponibles para los y las jóvenes que ofrezcan las diferentes administraciones públicas, que ayude a su publicidad y gestión a través de herramientas digitales.

Igualdad e inclusión educativa

Para que la educación sirva a su propósito como pilar fundamental y motor de transformación social, debe ser accesible a todas las personas y garantizar su permanencia, sin discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, estado de salud, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Asimismo, se debe prestar especial atención a aquellos colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Una de las prioridades del sistema educativo debe ser combatir la discriminación, la segregación y el acoso escolar, con una formación basada en la diversidad, la pluralidad y la solidaridad, donde todas las personas tengan cabida. Los centros y espacios educativos deben ser lugares seguros frente a todo tipo de acoso y violencia, atendiendo a las situaciones críticas que se puedan dar en entornos digitales, con un sistema coordinado y con recursos suficientes, tanto de personal, como material y didáctico, para actuar ante cualquier situación. Por ello, se deben poner más esfuerzos en la prevención, la sensibilización y la formación en esta materia, además de implantar y ejecutar los protocolos de actuación y protección de la víctima necesarios para poder hacer frente al acoso y la discriminación.

El feminismo ha transformado las relaciones humanas en términos de equidad de género, cambiando profundamente la educación de las personas y contribuyendo a una mayor feminización del estudiantado en todos los niveles. Por ello, se debe avanzar en una educación con perspectiva de género, que reconozca y visibilice el papel y la contribución de la mujer a lo largo de la Historia, con más referentes femeninos, e impulsando la promoción de las vocaciones STEAM entre las niñas y las jóvenes, rompiendo así con los estereotipos e imposiciones sociales.

Las realidades LGTBI+ y la diversidad afectivo-sexual han sido históricamente marginadas en la sociedad y en la educación. Por ello, no solo para formar, sino también para visibilizar, identificar y combatir el acoso y la discriminación contra este colectivo, es imprescindible integrar en el sistema la educación afectivo-sexual, en materia de orientación, expresión e identidad de género y sexual, así como reivindicar referentes LGTBI+.

La importancia de la diversidad y pluralidad se basa también en la multiculturalidad y en la integración sociocultural de todas las personas sin importar su origen étnico o racial ni su nacionalidad. Por ello, el acceso al sistema educativo de las personas migrantes y racializadas debe ser una política primordial para combatir la segregación social, fomentando también la educación en valores y la interculturalidad, poniendo en el centro la participación de minorías étnicas y personas migrantes. Así mismo, se debe velar especialmente por todas las personas en situación irregular, para que el sistema las acoja y no las excluya.

Debe garantizarse el derecho a una educación inclusiva y de calidad de todas las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo, basado en

la equidad y atención a la diversidad, proporcionando todos los apoyos y ajustes razonables en función de la necesidad del estudiantado. Es necesario disponer de una estructura amplia, suficiente y especializada de servicios educativos en todos los territorios, que tengan todos los medios necesarios para garantizar una educación inclusiva, de calidad, individualizada y centrada en la diversidad y necesidades de cada persona. Además, el sistema educativo debe realizar todos los ajustes razonables, tanto curriculares como metodológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación, así como garantizar a las personas usuarias de las Lenguas de Signos Españolas su utilización cuando se precise.

Una de las medidas fundamentales que impulsa la igualdad e inclusión en el sistema educativo es disponer de un sistema robusto de orientación y atención pedagógica que permita identificar y potenciar la educación de los y las jóvenes y su elección formativa, combatiendo de esta manera el abandono prematuro en las diferentes etapas educativas y realizando un acompañamiento eficaz, que disponga de los recursos y el personal suficientes.

Así mismo, es necesario que el sistema educativo disponga de los recursos humanos, técnicos, especialistas y sociales para cubrir las necesidades de los y las jóvenes en materia de Salud Mental, disponiendo de suficientes servicios de atención psicológica, impulsando formaciones en este ámbito y en la gestión emocional, tanto al personal educativo como al estudiantado, para poder identificar problemas de este tipo, ayudar en el proceso educativo y no generar espacios discriminatorios.

Calidad e innovación docente

Desde Juventud Verde consideramos que la calidad educativa no debe estar basada en la excelencia académica de los y las jóvenes desde una visión meritocrática que solo prioriza los buenos resultados; sino que debe basarse en el desarrollo personal y la adquisición de habilidades y competencias que permitan al estudiantado progresar en su entorno y su futuro tanto profesional como laboral, atendiendo a las particularidades de cada una de las personas, fundamentado en un proceso de enseñanza-aprendizaje individualizado y cercano.

En primer lugar, es fundamental disponer de un profesorado formado en metodologías docentes e innovación educativa y que el sistema potencie la investigación pedagógica, teniendo en cuenta los avances sociales, las nuevas herramientas y recursos digitales, así como la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad y la lucha contra el acoso

y la discriminación.

Para ello, es necesario dignificar la figura del personal docente e investigador, dotándoles de una estabilidad laboral y una urgente mejora de sus condiciones sociales y económicas. Además, se debe trabajar en una reforma del acceso a la profesión docente, atendiendo a las demandas de los diferentes colectivos y del estudiantado de educación y formación del profesorado. En este sentido, también es necesario avanzar en que la Educación deje de ser una profesión exclusivamente feminizada, especialmente en los niveles educativos iniciales, y se debe buscar una diversidad en el personal educativo, que represente la pluralidad de nuestra sociedad.

Uno de los aspectos que es necesario abordar a la hora de hablar de calidad educativa es la brecha digital existente en nuestro país. Ya no solo el acceso a Internet, sino el acceso a dispositivos electrónicos que permitan seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje en igualdad de condiciones, así como la formación y herramientas necesarias para poder desarrollar las capacitaciones tecnológicas necesarias en la actualidad. En este sentido, es necesario prestar especial atención a aquellos colectivos más vulnerables y al entorno rural, impulsando formaciones en nuevas tecnologías no solo al estudiantado, sino también al personal docente, para que exista una digitalización de la educación de manera integral.

Desde Juventud Verde consideramos fundamental que desde el inicio de la etapa educativa se introduzca en todos los niveles formaciones especializadas en la sostenibilidad, en medio ambiente, preservación de los ecosistemas y en la generación de un espíritu crítico y consciente de nuestro entorno, que cultive una ciudadanía conectada con la naturaleza y sensibilizada con el cambio climático. De igual manera, es necesario incluir en los currículos académicos formación con perspectiva de género, en igualdad, inclusión y valores democráticos y, de manera transversal y obligatorio en todos los niveles educativos, formación en materia de educación sexual.

La salud es primordial para un correcto desarrollo personal de la infancia y la juventud, por ello se debe fomentar el deporte y la actividad física, con educación en nutrición, así como la orientación necesaria al respecto, que evite generar conductas tóxicas con el deporte y la alimentación. La formación en idiomas también repercute en el desarrollo de los y las jóvenes, especialmente en su futuro personal y profesional, además de la internacionalización. Por ello, es necesario poner el foco en el plurilingüismo y en las diferentes lenguas del Estado, incluyendo las Lenguas de Signos Españolas,

reconociendo así la diversidad cultural y lingüística de los territorios.

Uno de los aspectos más críticos en la calidad educativa y en el desarrollo profesional y laboral de las personas jóvenes es la formación práctica en las entidades. En un contexto de grave precarización de la juventud, las empresas se sirven de prácticas abusivas y explotadoras, que emplean al estudiantado como mano de obra barata (y en muchas ocasiones gratuita), para desarrollar labores que están fuera de su competencia. Es por esto que, desde Juventud Verde, reivindicamos unas prácticas exclusivamente formativas, que estén remuneradas de manera suficiente para que las personas jóvenes puedan hacer frente al coste de oportunidad, coticen en la Seguridad Social y cumplan con los requisitos mínimos de calidad y unos controles adecuados para garantizar que el estudiantado adquiera las competencias profesionales necesarias.

Por todo lo anterior, Juventud Verde defiende el modelo de Aprendizaje Centrado en el Estudiante, basado en que el aprendizaje por parte de cada estudiante es constructivo, es decir, según sus necesidades y expectativas, construye un significado propio del conocimiento. Esta perspectiva asume que el profesorado debe comprender la realidad de cada estudiante, conociendo y apoyando sus rasgos heredados, perspectivas, experiencias previas, talentos, intereses, capacidades y necesidades de cada estudiante. Por lo tanto, el estudiantado adquiere un rol activo y central en su propia formación y, para ello, la formación debe ser más cercana e individualizada, en la que el profesorado pueda conocer en qué estado del proceso del aprendizaje se encuentra cada persona.

Democratización del sistema educativo

En consonancia con todas estas propuestas, desde Juventud Verde defendemos un modelo de cogobernanza en la Educación, donde no solo el aprendizaje sea constructivo, sino el sistema, las metodologías, las estructuras y los servicios se democratizan e incluyen la participación activa de todos los colectivos involucrados en el sistema educativo; impulsando un modelo de equidad en el que todas las personas comparten responsabilidades. Así, se construye una concepción democrática del sistema que fomente a las personas jóvenes a participar, tomar decisiones y hacerse responsables de su sociedad en igualdad de condiciones.

La participación del estudiantado, de la infancia y la juventud, en todos los niveles del sistema educativo es un motor de desarrollo de la propia educación y contribuye de manera amplia a la generación de una ciudadanía crítica y participativa, que esté

conectada con una sociedad democrática. De igual manera, supone un empoderamiento de los y las jóvenes a través de la construcción de una cultura de participación, que recoja las opiniones y las transforme en acciones eficaces que mejoren el sistema educativo.

Una de las maneras de incentivar la participación juvenil en la educación es a través del asociacionismo estudiantil en todos los niveles, en el que puedan llevar a cabo actividades, ya sean formativas, orientadas a la educación no formal, culturales o deportivas, que incentiven su sentimiento de pertenencia al sistema educativo y les permita desarrollarse de manera integral, ya no solo en el ámbito de la educación formal, sino en cualquier ámbito. Para ello, es necesario que las administraciones se vuelquen con el asociacionismo estudiantil, dotándolo de los recursos y espacios necesarios para poder desarrollar sus actividades.

De igual manera, la representación estudiantil es uno de los pilares fundamentales en la democratización de la educación. En primer lugar, es necesario que las instituciones educativas legitimen y respeten el papel de la representación estudiantil como interlocutores de la juventud a la que representan y tomen en serio sus reivindicaciones, así como que les permitan desarrollar su labor de manera libre, independiente y sin presiones. El papel de los Consejos de Estudiantes es imprescindible en la transformación de la educación, la mejora de las metodologías docentes y el progreso del sistema, por ello, deben tener la financiación suficiente para llevar a cabo sus labores, así como disponer de los espacios y el personal suficiente para ello.